¿VOTAD Y CALLAD?

ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Ante cualquier tipo de movilización social suelen generarse opiniones de todos los gustos, a cual más dispar, respecto a su éxito, su conveniencia, su justificación, su utilidad... Como es lógico en una sociedad democrática, todo es sanamente opinable. Sin embargo, hay algo que una sociedad democrática no puede ni debe admitir: que se excedan los límites de la sana crítica para entrar a cuestionar el libre ejercicio de los derechos fundamentales; y el derecho a la manifestación, no lo olvidemos, es uno de ellos.

Indefendible es el uso de la violencia como forma de protesta (tampoco como forma de represión), por muy justo y noble que sea el fin, precisamente porque su uso emborrona la legitimidad de quien se sirve de ella. Mantener esta opinión, no me impide, sin embargo, pedir un poco menos de histrionismo y más altura de miras a la hora de valorar e interpretar lo acontecido en las últimas protestas ciudadanas. Casi hiela la sangre escuchar a nostálgicos de tiempos preconstitucionales comparar las manifestaciones del 25-S con el Golpe de Estado del 81, o definir lo ocurrido en el acto de apertura del curso de la UMU como un acto terrorista.

Aunque lo mayoritario en las muchísimas movilizaciones que se han convocado en los últimos años sean las personas que acuden a ellas pacíficamente, las que no agreden, las que ejercen libremente su derecho a manifestarse..., por conocidos y obvios intereses particulares sólo se da protagonismo a las muy pocas que actúan de forma diferente. De esta manera, se intenta que la acción de una minoría condene la del resto y se aprovecha para trasladar el objeto de debate a las formas, a ver si con suerte se pasa de puntillas por el fondo.

Me parece muy grave y lamentable que se trate de anatemizar, con carácter general, el ejercicio de un derecho fundamental como el de manifestación, un derecho que garantiza el pluralismo político y social, un derecho que es síntoma de la calidad democrática de un país. No está de más recordar que se trata de uno de esos derechos que, junto al derecho al voto, protege la Constitución para permitirnos avalar o rechazar una decisión política. Sin embargo, en un ejercicio insoportable de arrogancia y autoritarismo, hay quien enarbola el haber salido elegido de unas elecciones como si se tratase de un cheque en blanco, cuando, en realidad, supone todo lo contrario, supone adquirir una responsabilidad y compromiso máximo de servicio a la ciudadanía. No hay nada más peligroso, ni nada que deje más en entredicho nuestra democracia, que tener unos representantes políticos que desprecian y hasta tratan de reprimir la voz de las calles.

La famosa y desconcertante imagen de un Rajoy distraído, puro en mano, paseando por las calles de Nueva York (parecía más una caricatura que una imagen real), seguida de su particular loa de las "mayorías silenciosas", produjo una estampa en blanco y negro; más bien negro: ¿existen las mayorías "silenciosas"? ¿pretende el PP patrimonializar incluso el silencio?.

¿Habla de la mayoría que sufre esta crisis? ¿Habla de las personas sin empleo, de las pensiones míseras, de las familias desahuciadas, de los salarios recortados, de los estudiantes que por falta de recursos dejan de serlo, de los jóvenes que se ven obligados a emigrar, de los servicios públicos desmantelados, de los dependientes sin ayudas, de los autónomos y pymes que se van a pique?... ¿Acaso cree verdaderamente que si diera la oportunidad al pueblo español de pronunciarse acerca de las medidas que está llevando a cabo su Gobierno, esa mayoría seguiría siendo "silenciosa"? En mi opinión, la respuesta es obvia: saben muy bien que su política carece del respaldo mayoritario de la sociedad y por eso se niegan a someterla a referéndum, como hemos pedido insistentemente las organizaciones sindicales. Les beneficia mucho más poder seguir mal administrando el silencio, interpretándolo como más les conviene.

La sociedad debe poder ejercer libremente el derecho a manifestarse, y defender todo aquello que nos quieren hacer perder. Sembrando el miedo y criminalizando la movilización sólo están buscando nuestra resignación para deshacer el país, para acabar con décadas de conquistas sociales y laborales, y para desmantelar el acceso universal y gratuito a la sanidad y a la educación. Y es que mientras el debate discurre por los derroteros equivocados, España deambula ya por el borde de un precipicio, vestida con harapos de hace 30 años.

Antonio Jiménez Sánchez es Secretario general de UGT de la Región de Murcia